



SERVICIO DE NOTICIAS – 7 de mayo de 2026 –

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA PRESENTA EL IX INFORME FOESSA, SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA

La Jornada Técnica ha contado con la participación de Marina Sánchez-Sierra Ramos, miembro del Comité Técnico de FOESSA, que ha expuesto los datos clave del informe, desgranando las principales conclusiones del Informe Foessa.

Caritas Diocesana de Cuenca- 7 de mayo de 2026.

La clase media en retroceso y desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores

Este informe describe un proceso de fragmentación social. Tras dos décadas de crisis, las recuperaciones no han cerrado la brecha. La exclusión social se profundiza y se cronifica, pues ganan peso en este territorio las situaciones de exclusión más severas. El informe FOESSA en Castilla-La Mancha habla de pobreza, pero principalmente habla de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos. Es un concepto mucho más amplio que abarca numerosas realidades además de la pobreza económica.

La exclusión social en Castilla –La Mancha afecta al 20% de la población

Vivimos un proceso inédito de fragmentación social. La desigualdad es el motor principal de la pobreza y la exclusión social en España y en Castilla-La Mancha. A pesar del crecimiento económico, España mantiene una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa. Aunque Castilla-La Mancha ha logrado reducir su tasa de desigualdad en los últimos seis años, la persistencia de la misma se traduce en vulnerabilidad en ámbitos esenciales como la vivienda, el empleo, la salud y la protección social. Hablamos de que 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones en la región. Aunque se ha producido una mejora significativa con respecto al 2021, año en el que medíamos las consecuencias de la Covid19, la exclusión social ha aumentado y afecta a 428.000 personas.

Brechas de desigualdad y exclusión: la vivienda y el empleo

Marina ha manifestado que “**no fallan las personas, falla el sistema**”. Hoy la exclusión social en Castilla-La Mancha funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: **la vivienda y el empleo**. La vivienda expulsa del territorio y de una vida

digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. En cuanto a la **vivienda**, el 22% de la población castellano-manchega está afectado por algún rasgo de exclusión residencial, entre otras cuestiones porque los precios (de compra y alquiler) crecen mucho más rápido que los ingresos, la cuota media del alquiler ha aumentado un 28% entre los años 2018 y 2023. Por otra parte, en referencia al **empleo** ha señalado que la precariedad es la nueva normalidad para una parte de la sociedad y que a día de hoy tener un empleo protege, pero no blindo. La recuperación del empleo en Castilla-La Mancha no se traduce en una reducción de la exclusión social. El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social.

Otro rasgo preocupante es la **erosión de la equidad en el acceso a la sanidad**, estamos permitiendo que el acceso a la sanidad dependa de la cartera, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio. En Castilla-La Mancha, más de 300 mil personas tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, a los servicios y productos sanitarios que precisan o a la atención médica adecuada para problemas de salud crónicos o graves.

Los rostros de la exclusión social en Castilla-La Mancha

La exclusión social en Castilla-La Mancha no se distribuye al azar: tiene rostros reconocibles que se repiten en el territorio y que combinan recursos materiales, procedencia, edad y estructura del hogar. El primero es el **origen y nacionalidad**: las personas de nacionalidad extranjera enfrentan tasas de exclusión social casi 3 veces superiores a las de nacionalidad española y las de origen extranjero 2,7 veces superiores a las nacidas en España. El segundo, **la infancia y juventud**: concentran una vulnerabilidad singular, la tasa de exclusión entre menores de 18 años (36,5%) es casi cinco (4,8) veces superior a la de las personas de 65+ (7,6%). Marina ha señalado que se observa un futuro desdibujado para los jóvenes, que ya en la actualidad viven peor que sus padres. Datos que afectan también a la tasa de paro, que entre los jóvenes menores de 30 años es del 24%, un porcentaje muy superior a la tasa general de la comunidad (13%). Y el tercero, **la composición del hogar**: La exclusión afecta al 39% de hogares en los que hay dos o más niños, niñas o adolescentes (menores de 18 años), un porcentaje que ha aumentado en 14,4 puntos porcentuales desde 2018. Dificultades que atraviesan a las familias y que explican, en parte, por qué las familias tienen menos hijos de los que desearían.

El informe propone un cambio de paradigma: **pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica**. Se necesitan políticas audaces, coherentes e integrales, ante un modelo que genera miedo y desconfianza. Debemos construir un “nosotros” inclusivo con las personas migrantes que suponga una integración real desde el primer día y regularización de derechos, además de superar las miradas defensivas y funcionalistas, avanzando del “bienestar” al “biencuidar”.

Necesitamos un cambio de paradigma con dos motores: requiere instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaces de cooperar por el bien común. Implica políticas integrales que actúen sobre las raíces de la desigualdad. Políticas que no solo reparen, sino que prevengan la exclusión desde su origen. Políticas y medidas que no solo redistribuyan, sino que predistribuyan para frenar la desigualdad en su origen.

Datos de la provincia de Cuenca

En la provincia de Cuenca, 40.000 personas sufren exclusión social, de las cuales 19.999 en exclusión severa. Por otro lado, 23.000 personas están en situación de pobreza severa. En términos de vivienda, 19.000 personas con tenencia de la vivienda en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio), y 24.000 personas con gastos excesivos de la vivienda.

En términos de salud/sanidad, 21.000 personas han dejado de comprar medicinas o prótesis, o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

Contacto: *David Serrano / Área de Comunicación (667 335 787)*
